bservatorio Exterior

CESCE

Mayo 2016

BRASIL

Ni orden ni progreso

Durante la Copa de Futbol de 2014, el 8 de julio, en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte la selección brasileña, "la Canarinha", era humillada por Alemania con un histórico 7-1. El resultado fue premonitorio. Quizás solo fuera coincidencia, pero más o menos a partir de ese momento Brasil empezó un descenso a los infiernos que ha dejado al país en un caos económico y político difícilmente imaginable a principios de la década, cuando el país sudamericano era considerado como la estrella de los emergentes.

La situación económica actual no tiene precedentes en la historia reciente de Brasil. El país ha entrado en una recesión –un -3,9% previsto para este año tras el -3,8% del año pasado– que se compara a la de la crisis de los años 30, y no se recuerdan datos tan desastrosos desde que existen registros económicos. El déficit público se dispara, el real se desploma, el paro y la inflación aumentan al mismo ritmo que el descontento de la población, que periódicamente se manifiesta en las calles para protestar, fenómeno relativamente novedoso en el país.

Pero lo más grave quizás no sea la evolución de la economía, sino la profunda desconfianza de los brasileños hacia su clase política.

Dos crisis mayúsculas están haciendo temblar los fundamentos democráticos del país y sus derivaciones salpican a sus principales líderes: el caso Petrobras y el proceso de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff. En teoría son dos fenómenos independientes, pero como veremos a continuación, los dos están tristemente entrelazados.

El caso Petrobras es un escándalo de corrupción de proporciones inéditas, en el que están sumidos al mismo tiempo los grandes actores económicos y los principales dirigentes de la gran coalición de centro izquierda con la que gobierna Dilma Rousseff. Las primeras informaciones saltaron a la luz pública en marzo de 2014 y conciernen a la enorme compañía petrolera pública Petrobras y a los gigantes constructores brasileños que trabajan con ella en las obras de infraestructuras relacionadas, en particular, con los yacimientos de hidrocarburos en aguas profundas hallados en las costas del Brasil meridional. Las constructoras crearon un cartel para sobrefacturar sus servicios en contrapartida de generosas comisiones, y no solo a los partidos de centro-izquierda de la coalición gubernamental. En teoría, las comisiones iban destinadas a financiar las campañas electorales, pero como siempre suele pasar en estos casos, dirigentes de las empresas y políticos se quedaron con parte de lo sustraído. Nadie sabe exactamente de cuánto dinero se trata, pero las estimaciones más bondadosas hablan de 2.000 a 3.000 millones de dólares, 100 veces más que el importe sustraído de las cuentas públicas en el escándalo de compra de votos de principios de siglo XXI, denominado “caso mensalao”.

¿Qué empresas están involucradas en el escándalo? Aparte de Petrobras, todas las grandes constructoras brasileñas: OAS, Odebrecht, Camargo Correira, Mendes Junior, Galvao, Iesa, Engevix, UTC/Constran, etc. Presidentes y altos ejecutivos han sido condenados y encarcelados, así como algún que otro cargo político, en particular el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari.

¿Qué partidos se han beneficiado de la trama? Se trata fundamentalmente del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y de Dilma Rousseff. Pero también están involucrados el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del PT en las dos Cámaras, y el derechista Partido progresista (PP).

Lo más grave de todo es el nivel de responsabilidad en la administración pública que tienen los principales implicados. La fiscalía del país pactó con uno de ellos, el senador del PT Delcidio Amaral, colaborar con la justicia a cambio de una reducción en la pena. A partir de ahí se han visto involucrados en la trama los principales políticos del país, sin excepciones. Hablamos del antiguo Presidente, el histórico líder del PT Luiz Inacio Lula da Silva; del líder de la oposición y candidato a la presidencia, Aécio Neves; del Presidente del Congreso, centrista y principal promotor de la destitución de Dilma Rousseff, Eduardo Cunha; tres ministros, un sinfín de altos cargos de Rousseff y numerosos diputados. También se ha visto acusado el posible futuro presidente, Michel Temer, vicepresidente actual e igualmente promotor de la destitución de la Presidenta.

¿Y cuál es el papel de Dilma Rousseff en todo esto? Por el momento, la Presidenta no ha sido citada por la fiscalía, pero la opinión pública ya la ha juzgado. Son muchos los brasileños que piensan que Dilma Rousseff no podía no saber lo que pasaba, y si no es culpable sí es responsable. Sobre todo si se considera que antes de ser la máxima mandataria del país fue, en el gobierno de Lula, Ministra de Energía, y por tanto tutelaba a Petrobras. Posteriormente fue Jefe de Gabinete del Presidente, lo que comportaba liderar el consejo de administración de Petrobras. La reputación de incorruptible que tenía la principal mandataria del país está profundamente empañada.

Los principales implicados no cesan de denunciar una persecución por parte de los jueces, pero la realidad es que ninguno ha logrado hasta ahora dar explicaciones convincentes sobre el origen de las cuentas generosamente dotadas en Suiza o Panamá, o sobre las sociedades pantalla en paraísos fiscales y los bienes inmobiliarios de lujo cuya compra es difícilmente justificable con un salario de Presidente, aunque sea brasileño. Además, es difícil acusar al sistema judicial brasileño de liderar una trama política de persecución contra ellos bajo encargo de no se sabe qué fuerza fáctica. Al contrario de lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, los observadores internacionales reconocen que Brasil dispone de un poder judicial independiente. Las investigaciones las llevan un "pequeño juez", Sergio Moro, de la ciudad de Curitiba, la policía federal y también se está dedicando a ello una comisión parlamentaria.

Donde se cierra el círculo es en la manera extraña con la que se entrelaza el escándalo de Petrobras con la posible destitución de la Presidenta Dilma Rousseff. El proceso de "impeachment" lo lanzó el recientemente destituido Presidente del Parlamento, Eduardo Cunha. Este personaje, implicado en la trama Petrobras al detectarse una cuenta en Suiza a su nombre con varios millones de dólares, decide vengarse por la desprotección que le proporcionó en su momento Rousseff, y por ello ha decidido hacer todo lo posible para llevarse por delante a la Presidenta en su probable caída.

Cunha es uno de los principales responsables del centrista PMDB, principal soporte del Gobierno en la cámara baja. De hecho, la destitución de Rousseff llevaría a la Presidencia a Michel Temer, vicepresidente actual y del mismo partido.

En el proceso de “impeachment” se acusa a la Presidenta de Brasil de haber maquillado las cuentas públicas en 2014, año de su segunda elección, con la ayuda de los bancos públicos. El delito se denomina “crimen de responsabilidad”. Se le acusa de haber maquillado “gasto público”, que normalmente debería estar presupuestado y ser contabilizado como tal, y haberlo derivado al sector bancario, haciéndolo desaparecer de las cuentas del Estado. Los brasileños llaman a esta operación “pedaladas”, y su importe se estima cercano al 1% del PIB brasileño, unos 25.000 mill.$. A partir de ahí se hacen patentes todas las traiciones. El Parlamento, en teoría controlado por la coalición de Gobierno y liderado por el imputado Eduardo Cunha, votó muy mayoritariamente a favor de lanzar el proceso de destitución (367 votos a favor y 137 en contra). En teoría, el próximo paso debería ser el voto del Senado, en manos de la oposición, y donde solo se necesita la mayoría simple de los 81 senadores. A partir de ahí, Dilma Rousseff será inhabilitada durante 180 días y Michel Temer, su vicepresidente y antiguo aliado, ahora principal adversario, ocupará la presidencia provisionalmente. Al cabo del plazo estipulado, si la investigación no ha concluido, la mandataria volverá a la presidencia hasta la fecha de su enjuiciamiento. La corte será presidida por el Presidente del Tribunal Supremo y el jurado serán los senadores que, en principio el próximo mes de octubre tendrán que votar sobre si “la Presidenta ha cometido los crímenes que se le reprochan y debe ser condenada a la pérdida de su cargo y a la prohibición temporal, por un periodo de ocho años, de ejercer cualquier cargo público o electoral”. Para ello se necesitará una mayoría de los dos tercios de los votos de la Cámara Alta.

Sin embargo, en el momento de escribir estas líneas el culebrón brasileño ha dado un nuevo giro, ya que el presidente en funciones del Congreso, Waldir Maranhao, ha suspendido el proceso de impeachment, aduciendo irregularidades democráticas, con objeto de devolverlo a la deliberación del Congreso. El presidente del Senado no ha aceptado esta decisión y pretende seguir con el proceso según lo previsto, lo que ha abierto un conflicto entre las dos instituciones.

Mientras tanto, la batalla política está servida. Los partidarios de Rousseff insisten sobre el hecho que si la “pedalada” ha existido, la Presidenta nunca se ha beneficiado personalmente de los fondos en cuestión, olvidando que uno de los argumentos para su reelección fue justamente la buena salud de las cuentas públicas. Hablan de un “golpe de Estado” jurídico-político liderado por su vicepresidente. La oposición no lo tiene tampoco fácil. Cada vez se estrecha más el cerco de la imputación al futuro presidente, Michel Temer, por el caso Petrobras, lo que hundiría al país en un caos político total.

Según los sondeos, una amplia mayoría de los brasileños estima que la mejor manera de salir de la crisis es que Dilma Rousseff dimita y que se adelanten las elecciones. Pero a la vista de la bajísima popularidad de la Presidenta (10% de opiniones favorables) para ella sería un verdadero suicido político.